



REPUBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLIN
SALA QUINTA DE DECISION LABORAL

Proceso:	Ordinario Laboral
Radicación:	05001-31-05-016-2018-00035-01
Demandante:	Dora Inés Rodríguez Hernández
Demandado	Colpensiones y Protección S.A
Asunto	Apelación y Consulta
Procedencia	Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito
Magistrada ponente:	Sandra María Rojas Manrique
Temas:	INEFICACIA AFILIACIÓN AL RAIS

Medellín, julio trece (13) de dos mil veinte (2020)

En la fecha, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO, CARLOS JORGE RUÍZ BOTERO y SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE, como Magistrada Sustanciadora, procede, de conformidad con el artículo 15 del decreto 806 de 2020, a decidir los recursos de apelación interpuestos por los apoderados de Protección S.A. y Colpensiones, así como el grado jurisdiccional de Consulta en favor de esta última, en los aspectos no apelados, respecto de la sentencia proferida por el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín, el 25 de noviembre del 2019, dentro del proceso ordinario laboral instaurado por la señora DORA INÉS RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES y de la

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS
PROTECCIÓN S.A, Radicado 05001-31-05-016-2018-00035-00.

1.- ANTECEDENTES

1.1.- DEMANDA

La señora DORA INÉS RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, instauró demanda ordinaria laboral, en contra de COLPENSIONES y de PROTECCIÓN S.A, pretendiendo se declare que en el acto de traslado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, no concurrieron las condiciones necesarias de asesoramiento debido, decisión informada y libertad de elección, que son presupuestos esenciales, para la eficacia jurídica del traslado, de manera subsidiaria solicita se declare que en el acto de afiliación a la AFP, sucedió un engaño imputable a las accionadas; se declare ineficaz o nulo el traslado de la accionante; se condene a Protección S.A. a devolver a Colpensiones los aportes y rendimientos, incluidos las comisiones, ordenando a la entidad la totalidad de dichos dineros.

Los supuestos fácticos que apoyan las anteriores pretensiones, se sintetizan en que la demandante nació el 11 de marzo de 1958, trasladándose a la AFP, el 9 de agosto de 1995, informándole Protección, que el ISS se iba a acabar, que la mesada en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, podría ser mayor y que podría pensionarse a la edad que quisiere, sin informarle sobre las condiciones adversas de su traslado, así como tampoco presentarle proyecciones pensionales, agregando que el extinto ISS, no le brindó ninguna asesoría a la actora, en el momento en el que la misma iba a realizar su traslado.

1.2.- CONTESTACIÓN

Por conducto de su representante legal y a través de apoderada, oportunamente COLPENSIONES dio respuesta al libelo introductorio, indicando que es cierto lo relacionado con el traslado realizado por la demandante, no constándole los demás hechos de la demanda, por ser ajenos a su representada.

A su vez, propuso las excepciones de inexistencia de la obligación demandada y falta de derecho para pedir; imposibilidad jurídica para cumplir con las obligaciones pretendidas; buena fe; prescripción y la innominada o genérica.

Por su parte la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A, al responder la demanda, aceptó como cierto la fecha de nacimiento de la demandante y el traslado realizado por la misma. Explicó que la entidad le brindó a la reclamante, información oportuna, clara, suficiente, concreta, adecuada y veraz, a través de la asesora, indicándole las ventajas y desventajas que aparejaba el traslado, así como las diferencias entre los regímenes, atendiendo a los parámetros que determina la normatividad vigente en esa época.

En su defensa formuló las excepciones de falta de causa para pedir; inexistencia de la obligación; prescripción-saneamiento por el paso del tiempo; saneamiento por ratificación de parte; ausencia de vicios del consentimiento y cumplimiento de los requisitos formales en la afiliación a Protección S.A., principio de la irretroactividad de la Ley; buena fe y prescripción.

1.3.- SENTENCIA DE PRIMER GRADO

Mediante sentencia proferida el 25 de noviembre del 2019, el Juzgado de conocimiento declaró la ineficacia de la afiliación de la actora a Protección S.A., suscrita el 9 de agosto de 1995, declarando, que para todos los efectos legales, nunca se trasladó al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad y por lo mismo siempre permaneció en el Régimen de Prima Media, ordenando

a Protección S.A., trasladar a la actora al Régimen de Prima Media; ordenó a la AFP devolver a Colpensiones, todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación de la demandante, incluyendo cotizaciones de forma completa, bonos pensionales, cualquier suma adicional, frutos, intereses, sin que pueda retener los gastos de administración, ni ningún concepto que haya recibido con ocasión de la afiliación, pues se considera que ésta no produjo efecto jurídico alguno; se ordenó a Colpensiones, reactivar la afiliación de la demandante y recibir todos los dineros que sean trasladados por Protección S.A.; y condenó en costas a la misma.

1.4.- RECURSO DE APELACIÓN

Protección S.A

El apoderado de la AFP, interpone el recurso de apelación frente a la Sentencia, oponiéndose a que se devuelva el 3% de las cotizaciones realizadas por la demandante, destinados a financiar los gastos de administración, la prima de reaseguros de Fogafin y las primas de seguros de invalidez y sobrevivientes, establecidas en el artículo 20 de la Ley 100 de 1993, toda vez que fueron cargas y contingencias, que Colpensiones no tuvo que garantizar, durante el lapso que la demandante estuvo afiliada en el Régimen de Ahorro Individual, asegura que aceptar la tesis contraria, que hoy sigue abanderando la Corte Suprema, implica un enriquecimiento para la demandante y para Colpensiones y se desconocería que este porcentaje se descontó por ministerio de la Ley, que se garantizó el capital adicional que se hubiera podido requerir, para financiar la pensión de sobrevivientes y de invalidez, si se hubiera configurado una contingencia de éstas, estando demostrado que se realizó una clara administración de los aportes, obteniéndose rendimientos financieros.

Agrega que la sumatoria de los aportes realizados por la demandante, es inferior al capital o a los rendimientos financieros, que se le han dado a la demandante, debiendo valorar el superior, la nueva línea de la Corte Suprema

de Justicia, frente a los efectos de la nulidad del derecho civil, en aplicación del artículo 1746, que regula las restituciones mutuas, es decir, que correspondería en derecho a su representada, retener los rendimientos logrados, si eso fuera así y procediera la devolución de los aportes y porcentajes definidos en el artículo 20 de la Ley 100 de 1993.

Colpensiones

La apoderada de la entidad, interpone el recurso de apelación, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 720 de 1994, con base en el cual, cualquier infracción, error u omisión, en especial aquellos que impliquen perjuicios a los intereses de los afiliados, en que incurran los promotores de las AFP, compromete la responsabilidad de la sociedad administradora, considerando que no es dable trasladar la responsabilidad a Colpensiones de recibir los aportes, para una eventual pensión de la demandante.

1.5. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

En la oportunidad procesal para formular alegatos, se pronunció la señora apoderada de Colpensiones, solicitando no acoger la decisión del a quo, dado que la demandante está incurso en la prohibición de traslado, así mismo se tenga en cuenta que Colpensiones como Administradora del Régimen de Prima Media fue un tercero ajeno al contrato celebrado entre la señora Dora Inés Rodríguez Hernández y la AFP Protección S.A; por lo tanto no puede haber condena alguna para la entidad, de igual forma solicita que se declare la ineficacia, se ordene a la AFP Protección S.A, a entregar a Colpensiones el total de los valores cotizados y/o depositados en la cuenta de ahorro individual de la demandante, tales como cotizaciones, bonos pensionales, títulos pensionales, rendimientos, intereses y cualquier otro concepto.

2. CONSIDERACIONES

2.1.- COMPETENCIA DE LA SALA

Inicialmente, debe advertirse que la competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de apelación, entendiendo que las partes quedaron conformes con los demás aspectos decididos; de conformidad con el art 57 de la Ley 2ª de 1984; los artículos 10 y 35 de la Ley 712 de 2001, que modificaron los artículos 15 y 66A del C.P.L y de la S.S., respectivamente.

De igual forma procede la consulta, en favor de Colpensiones, en cumplimiento del mandato contenido en el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social que dispone “*También serán consultadas las sentencias de primera instancia cuando fueren totalmente adversas a la Nación, al Departamento o al Municipio o a aquellas entidades descentralizadas en las que la Nación sea garante.*”

2.2.- HECHOS ESTABLECIDOS EN EL TRÁMITE DE LA INSTANCIA

Quedaron acreditados en el trámite del proceso y no son objeto de controversia los siguientes hechos:

- Que la demandante nació el 11 de marzo de 1958 (folio 16).
- Que la pretensora se trasladó del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, administrado por el Instituto de Seguros Sociales, al régimen de ahorro individual con solidaridad a través de la AFP Protección S.A., el 9 de agosto de 1995, con fecha de efectividad el 1º de septiembre de 1995 (folio 49).
- Que la actora acredita un total de 1975.15 semanas cotizadas, conforme a la historia laboral aportado por la demandada, obrante a folio 115.

2.3.- PROBLEMAS JURIDICOS A RESOLVER

Debe la Sala determinar:

¿Si se encuentra ajustada a derecho la sentencia objeto de apelación y de consulta proferida en el presente proceso por el señor Juez Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín, verificando si es ineficaz el traslado al Régimen de Ahorro Individual con solidaridad administrado por Protección S.A., efectuado por la demandante?

¿Si, en caso de confirmarse la declaratoria de ineficacia del traslado, es procedente ordenar a Protección S.A., trasladar las cuotas de administración, aportes al Fondo de Garantía Mínima y las cuotas de seguros previsionales a Colpensiones?

2.4. TESIS

Problemas jurídicos que se resuelven bajo la tesis según la cual, i) es ineficaz el acto de traslado, ii) es procedente el traslado de todos los conceptos que afectaron el valor de la cotización obligatoria, por lo tanto, la sentencia debe CONFIRMADA, como se explica:

2.5.- PREMISAS NORMATIVAS

El modelo pensional adoptado en Colombia a través de la ley 100 de 1993, permitió la concurrencia de dos regímenes pensionales, excluyentes, el régimen público de Prima Media con Prestación Definida, administrado por el extinto Instituto de Seguros Sociales y algunos Fondos y Cajas de Previsión del sector Público y el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad administrado por los Fondos Administradores de Pensiones, entidades financieras de carácter privado. (artículo 12)

El Régimen de Prima Media con Prestación Definida está caracterizado en los artículos 31 y 32 de la ley 100 de 1993, como un régimen en el cual las prestaciones que obtienen los afiliados o sus beneficiarios están previamente definidas por el legislador, donde los aportes de todo los afiliados constituyen un fondo común de naturaleza pública, con el cual se financia las prestaciones de quienes tengan la calidad de pensionados en cada vigencia y en el cual el Estado es quien tiene a su cargo la garantía de las pensiones a que se hacen acreedores los afiliados en este régimen, que se concreta a través del subsidio estatal.

Por su parte, el Régimen de Ahorro Individual, tal como lo define el artículo 59 del estatuto general de pensiones, está fundamentado en el ahorro proveniente de las cotizaciones y sus respectivos rendimientos financieros, el reconocimiento de la pensión y el monto de la misma está determinado por el capital acumulado, que debe ser el necesario para financiar una pensión mensual, superior al 110 % del salario mínimo legal mensual vigente para 1994 y reajustado anualmente según la variación porcentual de IPC. La solidaridad opera en relación con la garantía de la pensión mínima legal, que da derecho a que el Estado complete la parte que haga falta para financiar una pensión mínima de vejez.

En este contexto de dualidad, el literal b) del artículo 13 de la ley 100 de 1993, establece como característica del sistema general de Pensiones la libertad de selección de régimen en los siguientes términos *“la selección de uno cualquiera de los regímenes previstos por el artículo anterior es libre y voluntaria por parte del afiliado, quien para el efecto manifestara por escrito su elección al momento de la vinculación o del traslado. El empleador o cualquier persona natural o jurídica que desconozca este derecho en cualquier forma se hará acreedor a las sanciones de que trata el inciso 1° del artículo 271 de la presente ley”*

A su vez el artículo 271 ibídem establece que : *“El empleador, y en general cualquier persona natural o jurídica que impida o atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a*

su afiliación y selección de organismos e instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral se hará acreedor, en cada caso y por cada afiliado, a una multa impuesta por las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o del Ministerio de Salud^{<1>} en cada caso, que no podrá ser inferior a un salario mínimo mensual vigente ni exceder cincuenta veces dicho salario. El valor de estas multas se destinará al Fondo de Solidaridad Pensional o a la subcuenta de solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad Social en Salud, respectivamente. La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador. (subraya de la Sala)

El deber de brindar información completa, comprensible y veraz de las administradoras de Fondos de Pensiones, es consustancial a la actividad de estas entidades de carácter financiero y así fue establecido desde la vigencia misma del Régimen de Ahorro Individual, por el artículo 97 del estatuto financiero vigente para la época, decreto 663 de 1993, el artículo 4 del decreto 656 de 1994 y los artículos 10 y 12 del decreto 720 de 1994.

Posteriormente, el legislador ha regulado el contenido de la información que debe ser brindada a los potenciales afiliados, por parte de los Fondos de Pensiones; véase la ley 1328 de 2009, el decreto reglamentario 2555 de 2010, la ley 1748 de 2014, el decreto 2071 de 2015 y la circular 016 de abril 16 de 2016 de la Superintendencia Financiera, dentro del cual se incluye las reglas de funcionamiento, ventajas y desventajas de ambos regímenes, el análisis de la situación particular del afiliado, proyecciones financieras de la futura pensión y la obligatoriedad de la doble asesoría para eventos de traslado.

En esta misma dirección, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha consolidado una línea jurisprudencial reiterada y uniforme, en torno al deber permanente e ineludible de información que concierne a las administradoras pensionales, como condición de eficacia del traslado de régimen; según la cual la afiliación desinformada produce la ineficacia del acto; correspondiendo a las AFP la carga probatoria de demostrar que entregaron al afiliado la

información objetiva sobre la actividad de cada uno de los regímenes pensionales, para obtener un verdadero consentimiento.

Dan cuenta del precedente en referencia, los siguientes pronunciamientos:

Sentencia	Línea Jurisprudencial
SL, Rad, 31989 del 08 de septiembre de 2008	FUNDADORA Se produce la nulidad del traslado de régimen pensional por incumplimiento del deber de información, es insuficiente el formulario de vinculación para acreditar el consentimiento informado Inversión de la carga de la prueba hacía las Administradoras de Pensiones
SL Rad. 31314 del 08 de septiembre de 2008	FUNDADORA
SL, Rad 33083 del 22 de noviembre de 2011	CONFIRMATORIA
SL31314 del 06 de diciembre de 2011 de instancia.	CONFIRMATORIA
SL, SL12136 Rad 46292 del 03 de septiembre de 2014	La sanción del acto de traslado cuando se incumple el deber de información lo es la INEFICACIA del acto de traslado, de conformidad con el artículo 271 de la ley 100 de 1993.
SL 19447(47125) del 27 de septiembre de 2017	Debe acreditarse el cumplimiento del deber de información encontrándose o no la persona bajo en el régimen de transición.
SL 17595-2017 (46922) del 18 de octubre de 2017	CONFIRMATORIA
SL413 (52704) del 21 de febrero de 2018	CONFIRMATORIA La afiliación o traslado de régimen pensional no es dable deducirlo en todos los casos con el simple diligenciamiento, firma y entrega del formulario de afiliación.
SL4964 (54814) del 14 de noviembre de 2018	CONFIRMATORIA Las simples manifestaciones genéricas del afiliado de aceptar las condiciones del traslado no son suficientes para acreditar el cumplimiento del deber de información, quien debe probar la diligencia y cuidado es el Fondo de Pensiones, quien estaba obligado a emplearla.

SL4989-(47125) del 14 de noviembre de 2018.	CONFIRMATORIA Ineficacia de la afiliación por incumplimiento del deber de información Inversión de la carga de la prueba hacia las Administradoras de Pensiones
SL 1452 (68852) del 03 de abril de 2019	ACLARATORIA El deber de información es permanente y aunque ha tenido distintas fases en su regulación normativa, ha sido siempre ineludible. No se requiere una situación consolidada ni ser beneficiario de un régimen de transición para la aplicación del precedente.
SL1421 (56174) del 10 de abril de 2019	CONFIRMATORIA –
SL1688 (68838) del 08 de mayo de 2019	CONFIRMATORIA- Imprescriptibilidad de la Acción La información debe ser entregada de manera oportuna y por lo tanto la ineficacia debe ser evaluada respecto a la asesoría inicial, sin que se produzca su saneamiento en virtud de las reasesorías posteriores
SL1689 (65701) del 08 de mayo de 2019	CONFIRMATORIA-
SL3464 (76284) del 14 de agosto de 2019	CONFIRMATORIA-
SL4360 (68852) del 09 de octubre de 2019	CONFIRMATORIA-
SL4426 (79167) del 16 de octubre de 2019	CONFIRMATORIA La transparencia es una norma de dialogo, que impone dar a conocer al afiliado toda la verdad objetiva de los regímenes.

A ella se suman sentencias de las distintas Salas de Descongestión Laboral de la Corte Suprema de Justicia, tales como: SL782 del 14 de marzo de 2018, SL 3496 del 22 de agosto de 2018, SL361 del 13 de febrero de 2019, SL4933 del 30 de octubre de 2019, SL4937 del 13 de noviembre de 2019, SL5144 del 20 de noviembre de 2019, SL373 del 12 de febrero de 2020, SL600 del 25 de febrero de 2020, SL881 del 10 de marzo de 2020 y SL985 del 18 de marzo de 2020.

De acuerdo con la ratio decidendi de las sentencias de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, es indiscutible que, para resolver el problema jurídico atinente a la validez o eficacia de las afiliaciones al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, debe aplicarse las dos subreglas principales establecidos por el máximo Tribunal de la jurisdiccional ordinaria laboral, esto es i) el deber profesional, permanente e ineludible de información que tienen las administradoras de pensiones y ii) la inversión de la carga de la prueba, que les traslada la responsabilidad de acreditar que entregaron al afiliado la información necesaria para adoptar una decisión consciente.

2.6.- CASO CONCRETO

En el caso concreto, se establece el traslado de régimen pensional de la demandante a través de PROTECCIÓN, con fecha de efectividad el 9 de agosto de 1995, con fecha de efectividad el 1° de septiembre de 1995, no obstante, el mismo no da cuenta de información que fue brindada a la accionante, tal y como lo ha indicado la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia *“La firma del formulario al igual que las afirmaciones consignadas en los formatos preimpresos de los fondos de pensiones es insuficiente para dar por demostrado el deber de información, pues además de ello, la entidad administradora de pensiones tiene el deber ineludible de obtener del afiliado un consentimiento informado –(sentencia SL1688 de 2019); por ello no puede inferirse la voluntariedad del traslado en los términos del artículo 11 del decreto 692 de 1994.*

Aunado a lo anterior, no existe medio de convicción alguna a partir del cual pueda establecerse que PROTECCIÓN S.A., cumpliera con el deber profesional de información, para garantizar la decisión libre, voluntaria e informada de la afiliada, sobre las implicaciones de su traslado.

No se deriva confesión del interrogatorio practicado a la demandante, pues la misma afirma que a su lugar de trabajo llegaron unas niñas de Protección S.A., diciéndoles que les beneficiaba más pasarse al fondo, porque en ISS la pensión no era hereditaria, que ISS se iba a acabar, refiere que en esa época casi todos se trasladaron, la reunión fue individual, la asesoría no duró casi nada, le dijeron que tendría más rentabilidad, que la pensión podría ser mejor, solo recibió asesoría de Protección S.A., ella se emocionó con la información que le dieron y se trasladó, se dio cuenta de la pensión anticipada, porque una compañera lo hizo, pero ella no sabía de eso. Ella fue al fondo cuando se quería pensionar y se dio cuenta de la pensión tan bajita que obtendría, que no equivalía ni al 60% de su salario mensual.

En este escenario probatorio, ante la ausencia de medios de prueba que den cuenta de la información que brindó PROTECCIÓN S.A. a la demandante, no es posible una decisión distinta a la que adoptó el funcionario de primer grado.

Traslado de gastos de administración

Encuentran sustento jurídico las condenas impuestas a COLPENSIONES de validar la afiliación de la demandante y recibir los dineros que deben ser trasladados por PROTECCIÓN S.A., por cuanto la ineficacia supone que el acto no produce efectos jurídicos, como si no hubiese existido, por lo tanto no pueden excluirse del traslado los gastos de administración, ni las cuotas de seguros previsionales ni los aportes al Fondo de Garantía Mínima, teniendo en cuenta que estos afectaron el valor de la cotización de la demandante y al ser declarada la ineficacia, los pagos y deducciones quedan sin causa jurídica, debiéndose trasladar el aporte completo al régimen de prima media con prestación definida para garantizar el financiamiento de la futura pensión de la actora.

No puede afectarse, además, el fondo común de naturaleza pública del Régimen de prima Media con Prestación Definida, con la disminución de la cotización en favor de Protección S.A., máxime si fue ésta, quien dio lugar a la sanción del acto jurídico en virtud del incumplimiento al deber de información y esta misma, es la entidad en la cual se encuentra vigente la afiliación de la actora, por lo tanto, deben asumirlo aun de su propio patrimonio, conforme al artículo 963 del Código Civil.

De otra parte, los rendimientos generados mientras estuvo activa la afiliación, son de propiedad de la demandante y no del Fondo, tampoco resultan ajenos al régimen administrado por Colpensiones, conforme al literal b) artículo 32 de la ley 100 de 1993, dado que el fondo común también se integra por rendimientos de las cotizaciones de los afiliados.

Los aportes al Fondo de Garantía Mínima, cuya aplicación es exclusiva del RAIS, deben ser trasladados conforme al artículo 7 del decreto 3995 del 2008 y las sentencias SU062 de 2010 y SU 130 de 2013, destacando que la diferencia entre el ahorro y la cotización cuando se trata de traslado permitido legalmente, debe ser asumida por el afiliado, no así cuando, como en el sub lite, se trata de la sanción al acto jurídico por incumplimiento de la AFP al deber de información.

Ahora bien, en cuanto a los porcentajes de seguros previsionales, si bien los mismos ampararon los riesgos de invalidez y muerte en vigencia de la afiliación, generaron la disminución de la cotización y al quedar sin efecto la afiliación también deben ser trasladados, advirtiendo que con ello no se afectan los pagos realizados a la respectiva aseguradora, en tanto estos valores al no estar dentro de la cuenta de ahorro individual de la demandante, deben ser asumidos directamente por la A.F.P.

La orden de traslado impartida por el fallador primario, se encuentra ajustada a los anteriores criterios, en tanto ordena la devolución del porcentaje completo de la cotización, entendiendo que en ello se incluye los aportes al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, aunque no se hiciera una mención expresa a este concepto, por lo tanto, debe CONFIRMARSE el fallo. Costas en esta instancia a cargo de COLPENSIONES y PROTECCIÓN S.A

3. DECISION

En consonancia con lo expuesto, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley.

FALLA

1.- Se **CONFIRMA** la Sentencia de Primera Instancia proferida por el Juzgado Dieciséis Laboral de Circuito de Medellín, el 25 de noviembre de 2019, en el proceso ordinario instaurado por la señora DORA INÉS RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES y de la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.

2.- Costas en esta instancia a cargo de COLPENSIONES y PROTECCIÓN S.A., se fijan agencias en derecho en la suma de \$877.803 M/L, a cada una de ellas.


3.- Se ordena la devolución del expediente al Juzgado de origen

El fallo anterior queda notificado a las partes por ESTADOS, de conformidad con el artículo 295 del Código General del Proceso.

Los Magistrados,



SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE



CARLOS JORGE RUIZ BOTERO



VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO

La presente sentencia fue notificada por estado No. 090 fijado en la secretaría de la sala del Tribunal Superior de Medellín, a las ocho de la mañana (8:00 a.m.) del 14 de julio de 2020.

RUBEN DARIO LOPEZ BURGOS

Secretario